

Acuerdo de 25 de junio de 2020, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la suspensión del procedimiento en relación con el expediente de contratación 9/2020. Gestión de los pisos tutelados “Baltasar Santos” (Madrid) para la atención a personas mayores. Órgano de Contratación: Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.

Con fecha 16 de junio de 2020, se ha recibido en este Tribunal escrito de la representación de Sacyr Social S.L. formulando recurso especial en materia de contratación, contra su exclusión del procedimiento referido, por entender no justificada la baja temeraria en que se encontraba incurso su proposición, acuerdo adoptado el 25 de mayo por delegación del Consejero y publicado el día 27 de mayo en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid La exclusión se notifica el 26 de mayo. El 20 de mayo la Mesa propone nuevo adjudicatario. Y el mismo 25 de mayo acepta esta propuesta el órgano de contratación. Actualmente está en trámite de presentar la documentación el adjudicatario aceptado por el órgano de contratación.

La recurrente en el escrito de interposición del recurso solicita que se acuerde la medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación hasta la resolución del presente recurso, fundamentándolo en los perjuicios que podría acarrearle la continuación del procedimiento, que haría materialmente inservible una eventual resolución estimatoria del recurso.

El 18 de junio acusa recibo del recurso el órgano de contratación, recibándose respuesta el día 24 del mismo mes a las 14:25, en la que en lo que atañe a la suspensión se afirma lo siguiente:

“En cuanto a la suspensión del procedimiento que solicita la recurrente, hay que señalar que actualmente el procedimiento está pendiente de la celebración de la



mesa de contratación para analizar la documentación de FERROVIAL SERVICIOS, S.A. como propuesta adjudicataria. Considera este órgano de contratación que hay que ponderar los intereses generales de la Administración y la necesidad de no producir una demora innecesaria en la tramitación de este expediente, y los intereses de la recurrente evitando que se consoliden determinadas actuaciones y se produzcan retroacciones de las mismas.

Por ello, se considera que no perjudica los intereses de la recurrente el que se analice, por parte de la mesa de contratación, la documentación de FERROVIAL SERVICIOS, S.A y se cursen las subsanaciones que fueran necesarias, paralizando el procedimiento en el momento inmediatamente anterior a la adjudicación del mismo, sin que el órgano de contratación, en ningún caso, acuerde la adjudicación de este contrato hasta que no resuelva el TACP”.

El artículo 51.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) establece que en el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamenta el recurso, los medios de prueba de que pretende valerse el recurrente y en su caso las medidas de naturaleza cautelar cuya adopción solicite.

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el*



recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

Por otro lado, el recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato.

Esta misma argumentación relativa a la fase de adjudicación, nos sirve también para justificar la adopción de medidas cautelares en supuestos en que, como en el presente, no se impugna la resolución de adjudicación, sino algún otro de los actos objeto del recurso, cuando el estado de la tramitación del expediente coloca al mismo en una situación similar.

Dado que ya se encuentra el procedimiento en fase de presentación de la documentación del aceptado como adjudicatario y no cabe pronunciarse a esta hora y fecha sobre el fondo del asunto, cabe suspender el procedimiento con la fecha de efectos requerida por el órgano de contratación.

El recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener



una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar, y con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación en este supuesto se trata de evitar la posibilidad de causar perjuicios a los interesados afectados, y que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad:

ACUERDA

Suspender la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato de Gestión de los pisos tutelados “Baltasar Santos” (Madrid) para la atención a personas mayores.” Órgano de contratación: Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, justo antes de proceder a la adjudicación sin que en ningún caso, se acuerde la adjudicación de este contrato hasta que resuelva el TACP el recurso especial en materia de contratación.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

